

25. CONCLUSIONES

A lo largo de todas estas páginas se ha podido observar que nuestra afirmación, realizada allá por los capítulos introductorios, de la riqueza y potencialidad del movimiento elegido eran ciertas. Creemos que el análisis que hemos hecho ha sabido captar las características de la mediatización que hace la prensa de alcance nacional sobre los discursos de las entidades sociales promovidos a través de la acción colectiva. Pero también las iniciativas puestas en marcha para dinamizar diferentes aspectos de la temática del Desarrollo tanto en la agenda pública como política. Al considerar tres campañas de movilizaciones a lo largo de los años noventa se ha podido realizar un análisis longitudinal de esta dimensión discursiva y comunicativa de la acción colectiva de un movimiento que trabaja en red en su acceso a la agenda informativa.

Se ha constatado que comparten el mismo actor —el movimiento cívico llamado Plataforma 0'7— y la red de apoyo de importantes organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGDs) del ámbito de la cooperación internacional, así como de la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), la asociación de segundo orden más importante del sector, cuyo perfil institucional especializado, de carácter experto, la ha convertido en la interlocutora social de la Administración.

Los casos de movilización analizados (1994, 1998, 2000) están lo suficientemente espaciados temporalmente para hacer posible una perspectiva que permite analizar la evolución discursiva y orgánica del movimiento con ciertas garantías. Se ha constatado el paso progresivo de una concepción moral a una cada vez más politizada de la injusticia y la desigualdad en el ámbito del desarrollo y la consolidación de un proyecto organizativo de democracia de base asamblearia.

Las distintas campañas guardan una considerable consistencia interna en lo referente a la argumentación con que se diagnostican los problemas del Desarrollo y proponen objetivos para mejorar la cooperación internacional, que se han ido modificando y ganando en coherencia. Esto nos ha permitido estudiar la complejización de los marcos discursivos que se pusieron en circulación en la esfera pública pero que, sin embargo, tuvieron un acceso a la agenda informativa y un tratamiento periodístico notablemente diferenciado en períodos de tiempo similares en los mismos medios escritos.

En lo que se refiere a acción colectiva y de estrategia política, en los tres momentos analizados se pusieron en marcha distintas iniciativas que respondían a su propia evolución ideológico-identitaria, pero que también están vinculadas a la evolución y las ventanas de oportunidad que fueron apareciendo en el contexto político.

Las Acampadas del 0'7% en 1994 estuvo protagonizada por la Plataforma 0'7, con huelgas de hambre y acampadas como elementos básicos de protesta colectiva. Su estrategia estaba centrada en reclamar al gobierno el cumplimiento de la recomendación de Naciones Unidas de dedicar este porcentaje del PIB a la cooperación con los países más pobres del mundo. El objetivo último era conseguir el diálogo con los políticos y la búsqueda de compromisos y acuerdos.

La campaña de presión política para influir en la Ley de Cooperación en 1998 estuvo protagonizada conjuntamente por la Plataforma 0'7 y la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España. Ambas entidades se repartieron los papeles durante la tramitación de la Ley en las Cámaras Legislativas (de marzo a junio). La Plataforma se encargó de la movilización y estrategia de acción directa pacífica simbólica (tipo Greenpeace y en el amplio sentido del repertorio de acciones que lleva a cabo la organización ecologista, encadenamientos y ocupaciones de edificio incluidos). La CONGDE, por su parte, buscó “participar” en el proceso de negociación legislativa desarrollando una intensa actividad lobbística articulada con el proceso de movilización desarrollado paralelamente.

En 2000 se llevó a cabo el Referéndum por la abolición de la Deuda Externa. La campaña en pro de la Consulta Social está protagonizada por la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, una iniciativa organizativa impulsada por la Plataforma 0'7% como entidad sostenedora. Su repertorio de protesta se apoyó en la acción directa pacífica para atraer la atención pública y movilización ciudadana para la participación de un referéndum que se celebró durante la jornada electoral de las elecciones generales de marzo de 2000. Aquí la estrategia política fue movilizar en torno a un tema considerado problemático al tiempo que se plantearon mecanismos de democracia participativa y directa al margen de las instituciones. Incluso, puede considerarse que entró en el campo de la desobediencia civil cuando buena parte del movimiento decidió hacer caso omiso a la prohibición de colocar sus urnas por parte del Tribunal Superior Electoral

Los marcos discursivos se plasmaron en diversos documentos internos y en aquellos con los que expresamente se busca acceder a la agenda pública, interaccionando con la ciudadanía y otros colectivos y organizaciones sociales. El análisis de estos textos y la historia del movimiento nos ha permitido establecer las líneas argumentales o marcos discursivos, que primaron en cada una de las etapas. De hecho, en cada campaña se priorizaron, dentro de una tendencia discursiva a la radicalización, algunos procesos claros de enmarcamiento en términos de diagnóstico, de pronóstico y de identidad.

En 1994 (acampadas y huelgas de hambre del 0'7%) el problema del Desarrollo tendió a conectarse, en términos de marcos de diagnóstico, con causas un tanto difusas, como pueden ser los valores de opulencia y la inconsciencia del Primer Mundo sobre los graves problemas que vive la Humanidad. En los marcos de pronóstico, se responsabiliza a los políticos y a la población en general por su falta de conciencia y compromiso por lo que se propone la cesión del 0'7%. Este será un primer paso en la construcción de una identidad crítica, no violenta pero radical, apoyada en valores que potencian la entrega personal “desmesurada y urgente” (materializada en las huelgas de hambre).

En 1998, el problema del Desarrollo se centra más en cuestiones específicas de las políticas de cooperación que se consideran causa de una injusta, ineficiente y contraproducente asignación y gestión de los fondos de la cooperación. De este problema se hace responsable al partido en el gobierno, que se suma a la explotación irracional que el Norte realiza mediante este sistema de relaciones económicas internacionales y se propone la participación fiscalizadora de las organizaciones sociales (la propia Plataforma 0'7 y las ONG) para garantizar su correcto desarrollo legislativo en una ley que reduzca su carácter comercial y su instrumentalización como un elemento más de la política exterior. Esta demanda la realiza un movimiento que define su identidad como interlocutores políticos válidos de la sociedad civil, que reclaman el reconocimiento político de estos actores como co-legitimadores y co-gestores de este ámbito de la política.

Finalmente, en 2000, el problema del Desarrollo se diagnostica a partir del funcionamiento perverso del mercado globalizado promovido por el neoliberalismo, en particular en los mecanismos financieros que agravan el endeudamiento de los países del Tercer Mundo y obstaculizan o cercenan su desarrollo. Es, por tanto, una consecuencia lógica responsabilizar a los organismos financieros multilaterales (principalmente FMI, BM y

OMC) y los gobiernos del “Norte”, a los que se critica legitimados por los “nuevos aliados”, las ONG críticas y los movimientos sociales existentes en el entramado de la sociedad civil internacional (materializado en Campaña ¿Deuda eterna, Deuda externa? que impulsa una plataforma de entidades españolas conectadas en una red internacional) con la pretensión de promover su reforma o abolición en las políticas que gestionan la deuda externa. El espacio simbólico e identitario desde el que se produce la reivindicación es una reclamación de la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, radical en la medida en que crítica abiertamente al sistema representativo y comunicativo que sustrae el debate público a la ciudadanía.

Los marcos de superficie utilizados con mayor frecuencia y asiduidad para acceder a las distintas agendas van evolucionando en su complejidad. El proceso de especificación de objetivos y campos de intervención en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional se puede sintetizar en una secuencia de los tres momentos analizados:

En 1994 se produce la reclamación del 0'7 PIB, centrado y sintetizado en un aspecto cuantitativo: la cantidad de ayuda. No obstante, existen otras reclamaciones encaminadas a viabilizar la participación del sector social de la cooperación al desarrollo, con la solicitud exitosa de un órgano estable de interlocución (el Consejo de Cooperación, que entra en funcionamiento en 1995).

En 1998 se reclama una Ley de Cooperación transformadora y solidaria, centrada en alcanzar mejoras en los mecanismos institucionales previstos para desarrollar la cooperación internacional española, lo que es presentado como la “dimensión cualitativa” de la misma, al tiempo que se mantiene la reivindicación del 0'7 como horizonte de la acción. En esta campaña, se sumaron marcos de contenido experto formulado por la CONGDE, con los que se diagnostica, para su reforma, la situación actual de las herramientas institucionales y administrativas que gestionan la Ayuda Oficial al Desarrollo española.

En 2000, la puesta en marcha de una Consulta Social por la abolición de la deuda externa, implica una importante ampliación de los objetivos reformistas. Se solicita al Gobierno que además de revisar su papel como acreedor de países altamente endeudados, apueste por la reforma de los dispositivos institucionales con los que en la actualidad los organismos

transnacionales gestionan la economía internacional. Al mismo tiempo se reclama el derecho democrático de la ciudadanía a hacer uso de mecanismos de participación directa, más allá de la electoral.

Estas iniciativas presentadas en las tres campañas, en realidad condensan complejos procesos de interacción entre el movimiento y un doble contexto histórico y textual. La investigación ha tratado de ser sensible a la cambiante naturaleza de los contextos de oportunidad política y mediática, constatando la evolución de las condiciones de éxito político y discursivo del movimiento.

En lo que se refiere a la relación entre el Movimiento y los medios de comunicación o, más exactamente, el tratamiento informativo que éstos dispensaron a aquéllos, se ha comprobado que el juego de interrelaciones entre la agenda política y mediática se abre, cierto, pero sólo temporal y parcialmente a las demandas del movimiento que, de forma indefectible, acabará perdiendo visibilidad pública y rasgos conflictivos en la cobertura de sus reivindicaciones. En efecto, la estructura de oportunidad política del movimiento está condicionada por la estructura de oportunidad mediática, que se cerrará progresivamente, expresándose en un decrecimiento de la visibilidad y/o un aumento de los rasgos consensuales atribuidos al movimiento.

Las alianzas mediático-políticas en cierta medida y cuando lo consideran necesario instrumentalizan al movimiento, que en cierta medida se ve compelido a dejarse instrumentalizar para abrir su ventana de oportunidad mediática. En este sentido, son los medios que deciden cuando un movimiento puede jugar de opositor, en la medida en que son los medios los que gestionan el juego destrucción/reforzamiento del capital simbólico del gobierno de turno. Se constata, entonces, que las oportunidades mediáticas del movimiento dependen sobre todo de su funcionalidad para avivar o aplacar el juego político entre gobierno y oposición y, secundariamente, del que ocurre entre la clase política y ciudadanía.

Las dinámicas internas de los medios pueden operar a favor del movimiento cuando se da una búsqueda de discursos consensuales afines a la máxima audiencia, pero también en su contra cuando la lógica mediática comercial considera la “saturación” mediática de una temática y se activa el proceso de marginación informativa tras la apertura de ventanas de oportunidad más o menos amplias.

En resumen, y como conclusión general, el Movimiento se ve reforzado desde el ámbito político mediático a jugar en la esfera del consenso y a primar a los nodos más institucionalizados de sus redes (ONG), pasando a generar discursos políticos y mediáticos cada vez más convencionales. Esta institucionalización está, no obstante, salpicada de momentos de apertura y cuestionamiento de las agendas oficiales, pero al final prima la pérdida de visibilidad del Movimiento en general o de sus demandas más radicales.

En efecto, 1994 fue el momento de mayor presencia mediática del movimiento, habida cuenta de que se promocionó un marco consensual caracterizado por la posibilidad de enfatizar sus orígenes próximos a una Institución de “orden” como la Iglesia católica, y por la abstracción y amplitud de su demanda central. La reivindicación se centró en alcanzar la recomendación de Naciones Unidas como horizonte utópico. Debemos recordar también que la cifra 0’7 constituyó un icono sintetizador que facilitó su tramitación informativa en los medios. Al mismo tiempo cabe destacar que su impacto fue diferente en aquellos medios con líneas editoriales laicas —El Mundo y El País— y según sus alianzas político-mediáticas con (o contra) el Gobierno del PSOE.

1998 fue el momento en el que los actores sociales producen demandas concretas en la regulación de un programa de políticas públicas, algo que por su propia complejidad reduce de suyo la cobertura informativa. Esto no impide que el tratamiento informativo esté filtrado según las alianzas político-mediáticas. En términos de marcos hemos constatado que la división del trabajo entre las dos entidades protagonistas —la movilización de la Plataforma 0’7 y la CONGDE como instancia experta— producen distintos eventos noticiables a partir de marcos discursivos diferenciados. La Plataforma 0’7 enmarcó sus estrategias de acción de protesta simbólica en la espectacularidad y el conflicto; y consiguieron visibilidad, cierto, aunque sensiblemente menor que en el año 1994. La CONGDE enmarcó su actividad asesora en la negociación político-institucional sobre la que intentaba incidir. Alcanzaría menor visibilidad dado el proceso de saturación mediática y el control elitista institucional de la cobertura mediática de las políticas públicas. Los medios atienden, con preferencia, a los actores mejor instalados en el proceso de

elaboración de las políticas públicas y pierden interés por aquellos otros actores que no demuestran tener suficiente incidencia o autoridad.

En 2000 el movimiento se planteó radicalizar una estrategia de movilización reivindicando una demanda que fue excluida de la agenda electoral dominante. Exigieron y pusieron en práctica la Consulta Social sobre la Abolición de la Deuda Externa, que de hecho comportaba una estrategia de desobediencia civil a la Ley electoral. No obstante, las alianzas político-mediáticas (que promueven intereses simbióticos entre los políticos, los periodistas y las empresas mediáticas) hicieron que este tema, incómodo de tramitar de suyo para las elites políticas, viera reducido su impacto mediático hasta el punto de que llegar a una visibilidad casi nula.

Por lo tanto, el análisis de cada uno de los tres momentos hace posible ver que, a medida que el movimiento se aleja del marco consensual promovido por los medios, radicalizando su discurso al tiempo que concreta y especifica sus objetivos de una manera más política, va perdiendo “interés informativo” desde la perspectiva periodística —que en la perspectiva socio-politológica aquí desarrollada se traduce en pérdida de visibilidad pública—.

En este sentido, es pertinente apuntar diversos factores que eventualmente pueden pesar sobre el progresivo cierre de la estructura de oportunidad mediática que se observa a lo largo de estos seis años. Pueden considerarse como factores básicos de referencia la eventual saturación de noticias vinculadas a las movilizaciones en torno a la temática de desarrollo y también la definición dinámica de un estilo y modelo informativo de cada medio, ajustada al tipo de audiencia que busca captar cada medio. Pero, finalmente, es necesario subrayar como más determinante la creciente relación de dependencia entre la estructuras de oportunidad mediática y política, mediada por el entramado de relaciones que mantienen las instituciones mediáticas —en tanto empresas comerciales con, en principio— y políticos del Gobierno (particularmente del ministerio de telecomunicaciones).

Desde las acciones de Seattle en 1999, parece que las redes altermundistas están balizando la apertura de un todavía incipiente ciclo de movilización que responde en buena medida al *calentamiento* de los movimientos de base del Sur en la irrespirable atmósfera originada por la descomposición del proyecto neoliberal a lo largo de la década del noventa. La guerra global y permanente contra el terrorismo y la guerra de Irak ha hecho despertar a gran parte de la sociedad a un dantesco imaginario imperialista, en cierto modo de corte totalitario, que sensibiliza y activa a grupos y segmentos social e ideológicamente “integrados” tanto en el norte como en el sur. Lo que hace ganar públicos a las crecientes y cada vez más sofisticadas iniciativas de comunicación de las redes altermundistas - sin duda facilitadas por la mayor accesibilidad a diversos recursos tecnológicos que se van poniendo servicio de la protesta y de la propuesta de manera cada vez más sistemática (weblogs, listas de distribución, uso SMS, radios comunitarias, televisiones locales, agencias independientes de prensa, etc)-.

Pero todavía son poco ambiciosas las apuestas por una articulación entre espacios radicales participativos y los de representación en manos de los reformadores de campo socialdemócrata, que, sin embargo, se encuentran abocados a ensayar iniciativas dirigidas a regular unas nuevas reglas de juego en el campo de la cultura y la comunicación, espacio clave para la redefinición de las identidades (¿ciudadanas o consumidoras?) y los problemas sociales. Una articulación sociopolítica ineludible para transformar -no sólo desde los resquicios- un panorama audiovisual espectacularizado, al servicio de una estructura oligárquica de poder político-corporativo, decidida a seguir siendo totalmente irresponsable con los grandes retos sociales, medioambientales y democráticos de la sociedad globalizada.

Son nuevas iniciativas que tienen que alinear los intereses colectivos y los bienes públicos comunes que se defienden tanto en la reivindicación del *copy left* como en la defensa de la radiotelevisión pública renovada y de una nueva regulación para los medios de comunicación locales. Que tienen que hacer reconstruir el sentido de lo público con el

potenciamiento institucional del software libre y de las bibliotecas públicas que tiene que empezar a ser el acceso público al ciberespacio, y sobre todo con el aumento de presupuestos y de las dinámicas participativas en los sistemas educativos y en las políticas culturales a nivel local. Todos estos retos están integrados en la trascendental agenda para la *cumbre de naciones unidas para la sociedad de la información*, que negocia cuestiones culturales y mediáticas fundamentales en la ronda a celebrar en Túnez en noviembre de 2005. Un momento clave para la búsqueda de convergencias y alianzas entre los miembros de la sociedad civil global y las nuevas sensibilidades y talentos que parecen abrirse en algunos gobiernos reformistas del sur y del norte.